

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política

Papandreu, después de intentar que Grecia consiguiera financiar por si sola su deuda pública en los mercados internacionales, se ha visto obligado a solicitar de forma oficial la activación del mecanismo de ayudas diseñado por los países miembros de la eurozona y acordado el 25 de marzo pasado. El rescate está constituido por 30.000 millones de euros provenientes de préstamos bilaterales de países de la eurozona y otros 10.000 millones del fondo monetario internacional.

La decisión de activar el mecanismo de apoyo está claramente motivada por los acontecimientos de los días inmediatamente anteriores, es decir los tipos de interés de la deuda griega que habían batido todo record y la reevaluación de Eurostat del déficit de Grecia en 2009 (de 12,7% a 13,6%), así como la descalificación de la economía griega por parte de Moody's.

Durante la negociación de los términos del recurso al apoyo UE/FMI, el gobierno Papandreu perdía cada día terreno, con la petición al pueblo griego de sacrificios suplementarios que se iban ajustando de negociación en negociación, sin llegar por otra parte a restaurar la confianza de las finanzas internacionales.

El Primer Ministro ha explicado que los mercados no habían reaccionado, durante las semanas anteriores, tanto porque no creían en la voluntad de la UE, como porque algunos habían decidido seguir especulando, y ha afirmado que «la situación de hoy en los mercados amenaza con anular los sacrificios del pueblo griego y destruir la evolución normal de la economía, con el riesgo de que los esfuerzos de Grecia no sirvan de nada, dados los tipos de interés sobre los préstamos y, cosa aún más grave, sobre las posibilidades de préstamo».

Pero obtenido el apoyo europeo, no disminuyen los problemas. Tanto los demás partidos, especialmente los de la izquierda (la Coalición Radical de la Izquierda, SYRIZA, y el Partido Comunista), ven en este mecanismo todos los males y creen que habrá aún mas medidas de austeridad (desmentidas por el gobierno) y que durarán por lo menos otros tres años. Habrá vigilancia de expertos en todos los departamentos neurálgicos del Ministerio de Finanzas y de Trabajo. Y se han organizado una serie de manifestaciones por parte de ADEDY, el sindicato de funcionarios, ya que son estos trabajadores los más afectados por las medidas de austeridad anunciadas.

En cuanto al mayor partido de oposición, Nueva Democracia, de centroderecha, su presidente, Antonis Samaras, ha declarado que considera al gobierno como responsable y culpable de las dimensiones que ha cobrado la crisis económica en Grecia. Samaras aclara que respeta el esfuerzo de Papandreu, a quien considera una persona con férreos principios morales; pero anota que eso no significa que su gobierno sea

capaz de hacer frente a la coyuntura actual. Sostiene, además que, incluso ahora, el país podría evitar la intervención del FMI.

El presidente de la ND también hizo mención a los serios errores que se cometieron durante el anterior gobierno de Kostas Karamanlis, de su propio partido, y aclaró que, evidentemente, la responsabilidad no puede caer única y exclusivamente al ex primer ministro del país.

Por cuanto atañe a la opinión pública, más de 9 griegos de cada diez, concretamente el 92% de los encuestados por la sociedad pulse RC para el periódico dominical Typos tis Kyriakis, están convencidos de que el recurso de Grecia al FMI acarreará nuevas medidas económicas. El sondeo se realizó a raíz de la carta que el Ministro de Finanzas, Georges Papaconstantinu, dirigió a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario internacional (FMI). Sobre el total de las personas entrevistadas, el 48% declaró que este anuncio le suscitó rabia; el 28%, miedo.

Independientemente de su fe política, el 65% dijo que el recurso al FMI influirá negativamente en sus vidas, mientras que el 57% declaró haber pensado, frente a la carta de Papaconstantinu, que Grecia podría superar por sí sola la crisis gracias a una política apropiada, sin la intervención de Europa ni del FMI.

Situación económica y social

El 30 de abril, en el parlamento unicameral heleno, Papandreu defendió el último paquete de las medidas de austeridad, prácticamente impuestas por los expertos de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del fondo monetario internacional.

Para los empleados públicos, a partir de ahora se recortan salarios ya congelados, pensiones ya congeladas. Se reducirán los gastos públicos y se venderán propiedades estatales. Se cerrarán y eliminarán organismos, se reducirán muchos departamentos.

Pero lo peor es que también se verán perjudicados muchos trabajadores del sector privado, con un cambio en sus salarios e impuestos, el aumento de la edad de jubilación, del IVA, de muchos de los impuestos. Pérdida de derechos sociales adquiridos en un país con pocas prestaciones sociales, un subsidio de paro muy pequeño y un desempleo creciente (estaba en el 9% en diciembre y se acerca al 12% a finales de abril). Eliminación de los convenios colectivos para muchas profesiones. Y sobre todo, saber que las medidas serán para tres años como mínimo.

El nuevo paquete, aún no oficial a final de mes, debería comportar la suspensión de 13ª y 14ª mensualidad, tanto en el sector público como en el privado, donde se incorporarían dichas mensualidades extra en el salario principal, probablemente bajo forma de prima, es decir sin que entre en el cálculo de las pensiones; ulterior aumento, de uno o dos puntos, del IVA (que ya había sido llevado al 10% y al 21% por el paquete anterior); aumento de diversos impuestos y tasas sobre el consumo; eliminación del techo en la reglamentación de los despidos y probable supresión del Organismo de arbitraje sobre los empleos.

El Primer Ministro ha justificado estas medidas como condición indispensable para que Grecia obtenga el préstamo de apoyo de la UE y del FMI, que podrá elevarse a 120.000 millones en tres años, dejando entender que este plan le ha sido impuesto por los negociadores internacionales.

El presidente de la patronal SEB, Dimitris Daskalopoulos, tras un encuentro con Papadopoulos, ha asegurado que «Grecia podría volver a vivir días felices», pudiendo el sector privado contribuir a encender la esperanza de un regreso al crecimiento y al empleo; mientras que Vassilis Korkidis, de la Confederación Nacional del Comercio Griego (ESEE), ha subrayado que las medidas de la "troika" (UE-BCE Y FMI), desde luego duras, pueden por lo menos «permitir luchar económicamente», pero rechaza un nuevo aumento del IVA.

El presidente de la confederación general de profesionales, artesanos y comerciantes de Grecia (GSEBEE), Dimitris Assimacopoulos, ha reconocido la existencia, actualmente, de «una red de protección para los próximos tres o cuatro años», añadiendo de todas formas que el coste es caro y oponiéndose, también él, a un ulterior aumento del IVA y a la supresión de 13ª y 14ª.

Y si el presidente del Comité Económico y Social Griego (OKE), Christos Polyzogopoulos, ha hecho un llamamiento a los sindicatos y a las clases productivas a actuar a favor del objetivo, que es la recuperación de la economía, las presidencias de la unión de funcionarios (ADEDY) y de la Confederación General de los Trabajadores Griegos (GSEE) han denunciado una austeridad sin precedentes para los trabajadores.

«la supresión de las pagas extra y la congelación de las rentas por tres años, el cambio de coeficientes de impuestos indirectos y todo lo que todavía no ha sido anunciado hacen aún más difícil la vida de los ciudadanos, y de manera unilateral» ha declarado el Secretario General de ADEDY, Ilias Iliopoulos.

Por su parte, el presidente de GSEE, Yannis Ppanagopoulos, también ha denunciado que las medidas se han tomado contra los asalariados y pensionistas unilateralmente, declarando que las movilizaciones sindicales «se esfuerzan en limitar la fuerza del ataque» contra el mínimo vital de los griegos.

Panagopoulos ha rechazado propuestas de medidas que afectarían al sector privado de la economía, como la argumentación de que el coste del trabajo no influye sobre el deterioro de la competitividad de la economía griega, argumentando, por su parte, que los recortes a los salarios conducirá a retrasos dramáticos en los ingresos públicos y a una destructuración completa de la seguridad social, que se vería privada de 4.000 millones de euros.

La dirección de la GSEE, que a finales de mes debía reunirse con el Ministro de Trabajo, Andreas Loverdos, ha renunciado al encuentro, considerándolo sin sentido después de que el gobierno recurriera a UE y FMI, a las condiciones impuestas por estos organismos.

Loverdos ha denunciado a los componentes de la confederación, subrayando que «no existe ningún griego que ignore la situación trágica en que se encuentra el país. El consenso nacional y social, aun con algún

desacuerdo, sigue siendo el instrumento esencial de que dispone Grecia hoy en día para salir de la crisis. Que quien ha roto esta unión se tome sus responsabilidades».

La central sindical también anuló las reuniones previstas con los expertos de UE, BCE y FMI, que se encontraban en Atenas.

El comité ejecutivo de GSEE ha recordado que la seguridad social y el derecho al trabajo no son negociables y ha convocado, junto con ADEDY, el principal sindicato del sector público, una huelga general para el día 5 de mayo, esperando una participación masiva de la población para «enviar un mensaje fuerte al Gobierno y a la troika de expertos UE/FMI/BCE de que las experimentaciones neoliberales sobre las espaldas de la sociedad griega son criminales».

También el segundo sindicato del sector privado, PAME, cercano al partido comunista, ha anunciado su participación en las manifestaciones del 5 de mayo.